

XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2013.

# **Estrategias de movilización obrera clasista en tiempos de violencia y represión.**

Ortiz y María Laura.

Cita:

Ortiz y María Laura (2013). *Estrategias de movilización obrera clasista en tiempos de violencia y represión. XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-010/480>

*Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.*

**XIV Jornadas  
Interescuelas/Departamentos de Historia  
2 al 5 de octubre de 2013**

**ORGANIZA:**

Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras

Universidad Nacional de Cuyo

Número de la Mesa Temática: 57

Título de la Mesa Temática: “La clase obrera en América Latina: estrategias, experiencias y formas de abordaje”

Apellido y Nombre de las/os coordinadores/as: Nicolás Iñigo Carrera y Gonzalo Pérez Álvarez.

**ESTRATEGIAS DE MOVILIZACIÓN OBRERA CLASISTA EN TIEMPOS DE  
VIOLENCIA Y REPRESIÓN**

*Ortiz, María Laura*

*Programa de Historia Oral-UBA/CONICET*

*malauraortiz@gmail.com*

## 1. Presentación

La mayoría de las investigaciones sobre el clasismo cordobés se refieren al Sindicato de Trabajadores de FIAT Concord (SiTraC) y Materfer (SiTraM), entre 1970 y 1971. A la luz de esa experiencia se leen otras, como la que tuvo lugar en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) seccional Córdoba entre 1972 y 1974, o en la Mesa Coordinadora de Gremios en Lucha y las Coordinadoras Interfabriles de Buenos Aires y Santa Fe, en 1974 y 1975. Cada una de esas experiencias es presentada como un estudio de caso, a partir de su propia dinámica y según las características de la clase obrera en cada lugar y momento específico.

Si bien los estudios de caso aportan conocimientos sobre conflictos específicos, deberíamos tener en cuenta otras variables que permitan insertar los datos en una lógica histórica para analizar las dinámicas de la clase a través del tiempo.

Desde esta perspectiva, y en relación a los estudios sobre la clase obrera, se destacan los trabajos sobre las estrategias de la clase. Uno de sus precursores en nuestro país, Nicolás Iñigo Carrera (2000), ha estudiado los modos y las características de las estrategias de la clase obrera en consonancia con sus intereses coyunturales y estructurales, ya sea en búsqueda de la incorporación al sistema o de la transformación del mismo. Luego, otros trabajos han retomado la propuesta, como los de Victoria Basualdo (2008, 2011) que explica las estrategias de la clase obrera en lo sindical y político aunque incluyendo a la estructura económica como el elemento fundamental de la explicación. Por otra parte, Hernán Camarero (2007) discute con Iñigo Carrera su representación de la estrategia de la clase, en tanto para él no es una concepción que surge de la clase misma sino de la acción de sus cuadros políticos y sus instituciones, tales como los sindicatos y partidos políticos.

En este trabajo proponemos repensar estos supuestos, partiendo del estudio de la movilización obrera clasista en Córdoba durante el período posterior al “Cordobazo” de 1969 y anterior al golpe de Estado de 1976. En base a estos datos concluiremos que la estrategia obrera no sólo dependía de sus propias concepciones, conciencia y formas institucionales, o por la estructura económica, sino que también estaba mutuamente determinada por los cambios en la estructura política y represiva aplicada desde las clases dominantes.

Esta propuesta pretende historizar las estrategias clasistas en vinculación con las formas de dominación de los sectores empresariales, las “fuerzas de seguridad” y las élites

gobernantes. Creemos que a partir de esa mutua determinación se hacen visibles los quiebres y continuidades en las experiencias clasistas.

## 2. La tradicional represión empresarial y la oposición cotidiana

Historiadores especialistas en el mundo del trabajo han referido, en relación a la constitución de la identidad obrera, lo importante que es la oposición a “otros”, en especial a los patrones (Pozzi y Schneider, 2000; Pozzi, 2010).

Según los testimonios orales, y como puede comprobarse en una infinidad de noticias periodísticas<sup>1</sup>, había una serie de estrategias empresariales que tendían a impedir la organización obrera de bases. Una de ellas era impedir que los trabajadores eligieran a sus representantes, principalmente delegados, a través de amenazas de distinto tipo. Otra opción, más arriesgada en lo legal -ya que implicaba violar los fueros sindicales- era cesantear a representantes sindicales por diversas razones.

También el traslado de operarios entre distintas secciones de una planta o entre distintas plantas de una misma firma, podía ser útil a la desarticulación de las redes organizativas obreras, sobre todo cuando éstas implicaban la reivindicación de los derechos laborales y sociales. Para citar un ejemplo, en junio de 1971 la empresa Fiat decidió el traslado de 40 operarios de la planta de Materfer (encuadrados en el SiTraM) hacia la planta de Grandes Motores Diesel (GMD, encuadrada en el SMATA). El vicedirector de GMD los recibió con unas palabras de bienvenida y les recomendó que “debían olvidarse de SiTraM” (A.S., Subarchivo N° 1, Ficha N° 1, Doc. 27; Córdoba, 07-06-1971).

Pero a cada medida patronal, le respondía una obrera; y viceversa. Lo que para los marxistas es la lucha de clases, para los obreros era la cotidiana oposición a los mandatos empresariales. Ese “ida y vuelta” entre trabajadores y patrones tenía una serie de secuencias que eran parte del “sentido común” (Williams, 2000:137) y pueden rastrearse a través de las fuentes documentales.

---

<sup>1</sup> Para el desarrollo de este trabajo hemos consultado y fichado noticias relativas al mundo obrero en general, y clasista en particular, en los diarios de distribución masiva *La Voz del Interior* (en adelante, *LVI*) y *Córdoba*, entre mayo de 1969 y abril de 1976. También se ficharon publicaciones sindicales, en especial el Archivo del SiTraC (en adelante A.S., el que se encuentra totalmente digitalizado y on line en <http://sitrac.historiaoralargentina.org/>); alguna prensa partidaria, expedientes judiciales y archivos de audio con discursos públicos. Los testimonios orales fueron recolectados en repositorios orales y a través de la realización individual y colectiva de entrevistas, las que en total suman 35. Por razones de espacio, y para favorecer la fluidez de la lectura, las citas a las fuentes se harán únicamente en casos de citas textuales, no así cuando se referencia a casos que se repitieron a lo largo de los años.

Si los trabajadores demandaban una mejoría en las condiciones salariales o laborales, luego de agotar otras instancias de negociación, derivaban en diferentes medidas de fuerza como declaraciones de paro, ocupaciones de plantas o controles sobre la producción. Este momento podía ser iniciado por trabajadores organizados desde las bases (cuerpos de delegados o comisiones internas de reclamos) o bien, agrupados desde el sindicato.

A este momento le seguía otro, marcado por declaraciones de solidaridad de otras plantas o sectores, que también podían incluir peticiones propias. Esa es una característica ajustada a la época, donde la clase obrera tenía un sentimiento de identidad común; pero además, propia de la organización territorial de las fábricas en Córdoba (Ortiz, 2012).

En una instancia posterior la patronal iniciaba la represión, disponiendo suspensiones o despidos masivos, con los cuales se podía purgar las filas obreras de “indeseables”, tanto activistas como obreros poco rentables, ya sean los más ancianos como las mujeres con hijos. Así sucedió también luego de la disolución del SiTraC y SiTraM en octubre de 1971 y ya había ocurrido luego de esa “toma grande” del SMATA de junio de 1970, cuando la empresa despidió a 939 trabajadores. No sólo eso sino que además la empresa colaboró con el operativo policial de persecución de los protagonistas del conflicto, y para eso brindó el servicio de los guardias privados de IKA Renault que acompañaron a la policía en los allanamientos, “quienes requisaron, palparon de armas y realizaron detenciones”; y también prestó vehículos de propiedad de IKA Renault para los traslados. A esto hay que sumar el inicio de sumarios policiales contra 89 operarios por las ocupaciones que se labraron “dentro de las oficinas de las empresas, lugares en donde prestaron declaración los testigos –directores y supervisores- y presuntos rehenes (...) utilizando vehículos, máquinas de escribir y empleados de las mismas empresas” (LVI, 21-06-1970, p. 23).

Otra instancia del “ida y vuelta” de los conflictos fabriles acontecía cuando, luego de los despidos, comenzaba la negociación entre empresa y sindicato por las reincorporaciones. En estas negociaciones el sindicato, sobre todo no había formado parte de la iniciación del conflicto, podía sacar provecho purgando activistas de la oposición. Pero también podía resultar que de esas negociaciones se consiguiese la reincorporación de todos, o casi todos los despedidos. Así sucedió en varias oportunidades, como en el conflicto que ocasionó la toma en Fiat en enero de 1971 y en

el conflicto en Forja de IKA Renault por la declaración de insalubridad (*Córdoba*, 15-01-1971, p. 1; *Córdoba*, 31-03-1971, p. 6).

Por último, y según como fuese la resolución del conflicto, se impondrían determinadas condiciones laborales y salariales en la rutinaria labor fabril. Por ejemplo en Fiat, luego de la disolución de los sindicatos clasistas y los despidos, la empresa retomó el acoplamiento de máquinas para que cada obrero tuviese que atender más de una a la vez, exigiendo ritmos cada vez más altos de producción. Ese acople había sido frenado por los reclamos de los trabajadores y su conducción clasista, pero al finalizar abruptamente su mandato, y bajo amenazas de suspensión y despidos, las presiones patronales volvieron: “no se permite hablar, ni ir al baño y se sanciona toda ‘distracción’” (A.S. Subarchivo N° 1, Ficha N° 3, Doc. 100; *Córdoba*, 08-11-1971).

Si tradicionalmente los trabajadores han presionado a las patronales con medidas de fuerza, la política de las patronales tendía a “apretar” las condiciones laborales para favorecer sus ganancias, amenazando con despidos. Y eso no es específico de este período analizado, sino que es una verdadera “tradicción”. Así lo siente un operario que estuvo 39 años en IKA-Renault y que recuerda que todos los años salía de vacaciones “con temor” porque se “hacía correr la bolilla” de que por bajar la producción en el verano, se despediría personal (Passeti, 2010).

Esta lógica del enfrentamiento de clases en el ámbito fabril era una “tradicción”, aunque en general tenía más que ver con el impedimento o la defensa de la organización obrera en sentido institucional, ya sea en cuerpos de delegados, comisiones internas o sindicatos o bien, en función de una paritaria o convenio. Las presiones patronales, fueron acompañadas por –y, a su vez, acompañaron a- diferentes esquemas represivos gubernamentales, de acuerdo a los cambiantes momentos históricos.

Ese acompañamiento devenía de las alianzas dentro del patriciado local, formado por las viejas familias políticas –en las que se conjugaban el antiliberalismo clerical y el anticomunismo- que se habían enraizado en el estado provincial y que en los años ‘60 se había conectado con el gran capital industrial y financiero (Tcach, 2012). Es decir que el elenco gubernamental tenía como principales protagonistas a estos entornos políticos, cuyas dinámicas de dominación marcaron las limitaciones de la estrategia obrera, al tiempo que la movilización clasista marcó las limitaciones del ejercicio de la dominación.

### 3. La represión institucionalizada del estado dictatorial y el ultraizquierdismo, 1969-1972

En general, el “Cordobazo” es recordado como un hito que abrió un cambio de época, en especial para una generación que inició su militancia izquierdista por aquellos años. La renuncia del gobernador Caballero fue el hecho que representó la ofensiva popular en contra de la dictadura, en donde la ciudadanía en general, los gremios y la central obrera local se invistieron con un poder de autodeterminación inusitado. No obstante, el “Cordobazo” también significó un hito para la dictadura de la autoproclamada “Revolución Argentina”, que tuvo que ajustar su plan político a esos nuevos tiempos.

En efecto, a partir de mayo de 1969 el Estado aplicó una represión institucional de tipo militar, bajo la advocación del Estado de Sitio y apuntalado por los Tribunales Militares. Si bien el “Cordobazo” demostró la incapacidad represiva de la policía local – y posibilitó la toma de la ciudad por un día y medio hasta el ingreso del Ejército-, este primer período vio reforzar los sistemas de represión institucional militar y policial para evitar cualquier movilización obrera y/o popular, sobre todo luego de los conflictos suscitados en la fábrica Fiat y la rebelión popular conocida como “Viborazo” en marzo de 1971.<sup>2</sup>

Tanto después del “Cordobazo” como del “Viborazo” se intervino militarmente al ejecutivo provincial, aunque en una y otra oportunidad la intervención tuvo diferentes grados de profundidad. En 1969 se hacía hincapié en que la medida sólo afectaba al poder Ejecutivo y -aunque también se había dispuesto el traslado de la Gendarmería a la ciudad capital y el funcionamiento de Tribunales Militares para sentenciar a los “incitadores de la violencia”-; la cotidianeidad de la ciudad no fue transformada

---

<sup>2</sup> El nombre de “Viborazo”, se pensó como una respuesta a la declaración que había hecho unos días antes el entonces gobernador de la provincia, José Camilo Uriburu, refiriéndose a que su misión era “*cortar la cabeza de la víbora comunista*” que anidaba en Córdoba. El levantamiento popular se inició el 15/03/1971, un día de paro declarado por la CGT regional. Los gremios clasistas y combativos, junto a algunas agrupaciones políticas se citaron en un acto en el centro de la ciudad, al que asistieron cerca de 10.000 personas. La dirigencia de la CGT no se hizo presente, por lo que se hicieron cargo del palco el SiTraC y SiTraM. Maserá abrió la lista de oradores: Luz y Fuerza y S.M.A.T.A. propusieron tomar el barrio Villa Revol (en cuyo centro había una usina de la empresa de energía eléctrica EPEC) y los gremios clasistas, en cambio, mocionaron por la ocupación de barrio Güemes, que distaba pocas cuadras del lugar en que se encontraban reunidos. A primera hora de la tarde ya estaban ocupados los barrios Colón, Clínicas, Villa Revol, Güemes y había barricadas en San Vicente. Se atacaron “blancos” que simbolizaban el imperialismo, como Xerox, Iccana, Banco de Galicia y el Jockey Club. Luego llegó la represión policial con gases y un muerto. En la madrugada, la brigada antiguerrillera de la Policía Federal, al mando del Crío. Villar, rastrelló el barrio de Clínicas, con un resultado de 400 detenidos y 19 heridos. (Duval, 2001: 47-50; Flores, 2004:174-189).

significativamente (*LVI*, 17-06-1969, p. 9; *LVI*, 19-06-1969, p. 21). En cambio, luego del “Viborazo” en 1971 el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) intervino la provincia y la puso bajo el control del III Cuerpo de Ejército. Durante esas jornadas se registró “el despliegue más espectacular de tropas que recuerden los cordobeses”, tanto de la Policía de la Provincia como de la Federal, tropas del Ejército y de la Gendarmería que custodiaban edificios públicos, mientras motocicletas “antiguerrilleras” recorrían incesantemente las rutas de la ciudad (*Córdoba*, 19-03-1971, pp. 1-2; *Córdoba*, 23-03-1971, p. 1).

En 1969 habían actuado 200 policías, en tanto en 1971 fueron 2.500. En la segunda oportunidad las radios y canales de televisión fueron censurados y emitían bandos militares, que fueron interpretados por los gremialistas combativos como “una acción psicológica con la que se pretendió desprestigiar a los dirigentes obreros y modificar el concepto socio-político que los trabajadores tienen respecto a la huelga y la protesta” (*UTA*, Año 1, N° 4, febrero de 1971, pp. 4-7; *Córdoba*, 16-03-1971, p. 4; *Córdoba*, 23-03-1971, p. 5).<sup>3</sup>

La represión se fue intensificando a lo largo del período, de manera que luego de la disolución de los sindicatos de Concord y Materfer en octubre de 1971, comenzó a haber “despliegues masivos de fuerza en toda la ciudad ante el menor asomo de movilización (antes de ellas), ocupación total de las plantas por la gendarmería que se despliega en formación de ataque a la salida de cada turno”, además de órdenes de captura para varios miembros de las direcciones de la resistencia de SiTraC y SiTraM y de otros gremios, allanamientos constantes, requisas, “vigilancia de civil, seguimientos, instalación de patrullas en las casas de los activistas buscados” (A.S., Subarchivo N° 1, Ficha N° 3, Doc. 107).

---

<sup>3</sup> Luego del Viborazo el estado de emergencia permitió que el ministerio del Interior ordenase la intervención por “actividades subversivas” a sindicatos que integraban el Comité de Lucha de la Confederación General del Trabajo (CGT) y detuviera a centenares de dirigentes sindicales y activistas fabriles que habían “incitado a la subversión”, allanando sus domicilios y deteniendo a disposición del PEN a centenares de ellos. (*Córdoba*, 16-03-1971, pp. 4, 16; *Córdoba*, 17-03-1971, p. 1; *Córdoba*, 19-03-1971, p. 4; *Córdoba*, 28-04-1971, p. 5; *Córdoba*, 30-04-1971, p. 3; *Córdoba*, 03-05-1971, p. 11; *Córdoba*, 17-07-1971, p. 1; *Córdoba*, 09-04-1972, p. 2). En el caso de Fiat además, las medidas represivas se complementaron con la presencia de efectivos de seguridad en las proximidades de la planta. Por las detenciones de sus dirigentes, la intervención de sus sindicatos y la injerencia de las “fuerzas de seguridad” en sus lugares de trabajo, SiTraC y SiTraM hizo abandonos de tareas (*Córdoba*, 19-03-1971, p. 6). Curutchet, el asesor legal de estos gremios, presentó un habeas corpus por los dirigentes gremiales y operarios detenidos en sus lugares de trabajo el 19 de marzo por la Gendarmería y trasladados a dependencias del III Cuerpo de Ejército ubicadas en Camino a la ciudad de La Calera (*Córdoba*, 21-03-1971, p. 3).



Para esa profundización de la represión fue fundamental el apoyo de la Policía Federal y del Ejército. El hostigamiento a los sindicatos clasistas fue denunciado por el sindicato de colectiveros (UTA), que luego de la disolución de SiTraC y SiTraM prestaba su local para reuniones de los despedidos de Fiat. En noviembre de 1971, en los momentos previos a una de esas reuniones, fueron allanados por la Policía de la Provincia que, aunque vestidos de civil, fueron “munidos de un armamento que hace recordar a la serie televisiva que se difunde con el título de ‘Combate’”. Cuando les pidieron que les mostraran la orden de allanamiento, el oficial a cargo del operativo dijo que no era necesaria porque respondían órdenes del III Cuerpo de Ejército. Luego de requisar el lugar, se llevaron a alrededor de 40 detenidos (*UTA*, Año 2, N° 10, octubre-noviembre de 1971, p. 11).

En relación a los criterios para realizar detenciones, también fueron variando a lo largo del período. Al principio, en 1969, el criterio era amplio, y podía incluir a una variada gama de causas y de hecho incluyó a militantes de izquierda, sectores progresistas, sindicalistas combativos y burócratas sindicales, peronistas legalistas e incluso, ortodoxos (*LVI*, 31-07-1969, 22). Pero más cerca de 1971 los criterios fueron más selectivos y orientados hacia sectores clasistas y combativos, seguramente merced al trabajo de inteligencia que las distintas fuerzas –policiales y ejército- estaban realizando, tal y como demuestran los documentos desclasificados del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), Carpeta SITRAC-SITRAM 1971 (Comisión Provincial por la Memoria, La Plata). Para ello la policía local fue reforzada por contingentes de Guardia de Infantería, Brigada Antiguerrillera de Policía Federal y Gendarmería Nacional enviados directamente desde Buenos Aires hacia Córdoba para asistirle en momentos de manifestaciones, paros masivos u otros conflictos socio-políticos.

Si en 1969 y 1970 las detenciones se contaban en decenas, desde 1971 fueron de a cientos, al tiempo que el alojamiento en cárceles locales por períodos breves fue alargándose cada vez más y podían implicar traslados a cárceles y prisiones en el sur del país, en algunos casos por causas judiciales instruidas por la Justicia Federal.

La función del Poder Judicial era una herramienta útil a la represión de los trabajadores, a pesar de los intentos de abogados comprometidos políticamente. Así, por ejemplo, la empresa Fiat inició 3.000 causas civiles y penales contra los obreros que habían realizado la toma de la planta el 14 de enero de 1971, de manera que según esa

imputación los trabajadores deberían afrontar individualmente los gastos que produjeron a la empresa con su medida de fuerza (A.S., Subarchivo N° 1, Ficha N° 2, Doc. 44M; Córdoba, principios de julio de 1971).

Aunque el Poder Judicial podía expedirse en este tipo de casos, en general en las causas contra militantes populares, políticos y gremiales actuaban los Tribunales Militares, que en la jerga castrense se llamaban Consejos de Guerra especiales. De hecho el funcionamiento general de la justicia local se encolumnó detrás de los dictámenes del gobierno central en contra de los trabajadores, lo que ha quedado documentado en los sistemáticos rechazos de los recursos de Hábeas Corpus presentados.<sup>4</sup> La Justicia local no consideraba que fuera su jurisdicción decidir sobre casos de detenciones dispuestas por el PEN, e insistía en que era la Justicia Federal la que debía decidir en esos casos.

La Justicia Federal, a su vez, tuvo un funcionamiento más bien pendular ya que, por un lado, ésta también rechazaba los Hábeas Corpus con similares argumentos a los del foro local. Pero al mismo tiempo tuvo que atender los planteos de algunos abogados de sindicatos que interpusieron recursos para declarar la inconstitucionalidad de la Ley N° 18.232 por la que se crearon los Tribunales Militares. En ese asunto, la Cámara Federal se vio obligada a declarar que los Consejos de Guerra especiales de Córdoba no tenían competencia para dictar sentencias a los 42 civiles que juzgaron en 1969 y que carecían de vigencia a la fecha de los hechos juzgados, tal y como se estipula en el artículo 18 de la Constitución (*LVI*, 14-08-1969, p 15 y 20; *LVI*, 24-09-1969, p. 18).

Pero en este clima de facto, las decisiones de la Justicia Federal no tenían peso si contradecían los intereses del gobierno. Por eso la fiscalía apeló esa decisión y la cuestión quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, cuya vinculación íntima con el PEN ha sido una constante histórica (Ortiz, 2007).

El hecho de que interviniera el Poder Judicial daba un manto de legalidad a una situación de facto, signada por el estado de emergencia. Es decir que, aunque existían causas judiciales y debidos procesos, muchos de ellos estaban viciados: por ejemplo, era común la denuncia de allanamientos sin la orden correspondiente y de denuncias por malos tratos durante las innumerables detenciones, provocando fracturas y lesiones de diversos tipos.

---

<sup>4</sup> Se consultó la serie Hábeas Corpus del Archivo Histórico del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba en la que se puede observar el sistemático rechazo a los hábeas corpus presentados por activistas, sindicalistas y militantes políticos.

Como dijimos al comienzo de este apartado, si bien la represión más característica de esta etapa fue la institucional, también hubo algunos ataques aislados de bandas paramilitares de las que es muy poco lo que se conoce y que, suponemos, fueron los embriones de las que funcionaron luego de 1973. A ellos se sumaba la “tradicional” represión empresaria que reseñamos al comienzo de este trabajo. Pero lo específico de este período es que lo que era una “tradicción” entre patronos y obreros, adoptó ribetes militaristas. Así sucedió en varias fábricas. Por ejemplo en Industrias Mecánicas del Estado (IME), la empresa ordenó detener a dos miembros de la Comisión Directiva (CD) del gremio por presentarles una petición en defensa de los trabajadores que habían sido sancionados por adherirse a la marcha del 29 de mayo de 1969. Por esa detención los dirigentes de ATE Carlos Rojas y Alberto Rosales fueron enviados a juicio en los Tribunales Militares, aunque para su suerte fueron liberados al otro día por falta de mérito (*LVI*, 06-06-1969, p. 11).

A pesar de que la represión estatal y empresarial existía durante este período, el “Cordobazo” había intensificado el proceso de politización e izquierdización de las protestas callejeras que propició un momento de auge de masas, haciendo posible una transición de la defensiva a la ofensiva en la protesta obrera que fue tomando, a lo largo de estos años, un tinte cada vez más clasista (Pozzi y Schneider, 2000; Gordillo 2001, 2003).

En este contexto político, el clasismo formó parte de la estrategia obrera como forma de ensamblaje de ideas izquierdistas y lucha fabril. Las expresiones clasistas durante este período comenzaron en las plantas de Grandes Motores Diesel y Perdiel durante la “huelga grande” del SMATA y luego, en las plantas Concord y Materfer de Fiat, al mismo tiempo que en fábricas de calzado y vidrio. Estas experiencias, que se mantuvieron en la memoria obrera como ejemplos de lucha de las bases en contra de sus dirigencias sindicales “burocráticas”, estuvieron dirigidas por la línea política definida como “al margen y por fuera” de los sindicatos. En esa línea, el proceso de “toma del poder” del sindicato por las bases obreras se sostenía en planteos ultraizquierdistas que pretendían que la clase obrera y sus sindicatos debían tomar el poder del Estado. La estrategia era la movilización de las bases obreras para remover a las dirigencias tradicionales antes que intentar participar en elecciones gremiales, que en general eran controladas por la patronal y en connivencia con las tradicionales dirigencias sindicales conservadoras y/o peronistas ortodoxos.

La cristalización de esa estrategia, expresada en la bandera que se empuñó con tenacidad en Fiat “ni golpe ni elección, revolución”; recobra sentido si se la enmarca en este momento del ejercicio del poder por parte de las clases dominantes.

Durante este período los clasistas se oponían a la central obrera local, como parte de esa burocracia sindical que rechazaban. Y es que al menos desde hacía una década, la CGT regional Córdoba tenía un claro perfil peronista, con una importante gravitación de las 62 Organizaciones. Sus dirigentes habían asumido sus puestos luego de que en 1955 fuesen proscriptos los viejos líderes peronistas. Algunos de ellos provenían de la militancia en la resistencia peronista y otros adscribían a otros espacios políticos, tanto del radical como del comunista. Es justo decir que era una central obrera activa y combativa, aunque posteriormente esa consideración se modificó; al contrastar su modalidad de paro “dominguero” con el de paro activo que caracterizó a la movilización obrera de principios de los años ’70. Es decir que, aunque luego fuese considerada “burócrata”, la CGT hasta 1970 estaba en consonancia con la conformación política del momento y con su nivel de movilización social.

Hasta 1970 el secretariado de la CGT estuvo constituido únicamente por peronistas, encabezados por el vandorista Elpidio Torres, luego de fracasar un intento de acuerdo con un sector de gremios “independientes”. Este secretariado tuvo un posicionamiento moderado, más afecto a las negociaciones que a las movilizaciones callejeras. El espectro peronista estaba hegemonizado por los ortodoxos, quizás por ello resulta sugerente que en ese tiempo uno de sus asesores letrados fuese Julio Antún, que años más tarde lideraría la Mesa Redonda Peronista Permanente (MRPP) y apoyaría el “Navarrazo”.

La predominancia de esos sectores se fue minando hacia 1970 por diversos factores. Por un lado, las movilizaciones al margen de las direcciones gremiales tradicionales que tuvieron lugar en este período. Por otro lado, habían resurgido tensiones entre ortodoxos y legalistas dentro de las 62 Organizaciones por la relación con los grupos no peronistas. Por último, el hecho que decantó estas tensiones fue una huelga en el SMATA<sup>5</sup>, de cuya derrota se responsabilizó al mismo Elpidio Torres que terminó renunciando.

---

<sup>5</sup> En junio de 1970 se produjo la “toma grande” en la que se tomaron los principales establecimientos fabriles mecánicos con rehenes, y luego de 34 días de lucha se produjeron detenciones de activistas, allanamientos de sus domicilios y más de 900 cesantías; sin haber logrado ninguna de las reivindicaciones

A partir de allí comenzó a tomar fuerza dentro de la CGT Atilio López<sup>6</sup>, que tenía una posición combativa dentro del peronismo legalista y promovía alianzas con los gremios “independientes”, especialmente con el dirigente Agustín Tosco del Sindicato de Luz y Fuerza (*Córdoba*, 16-01-1971, p. 5). La otra fracción del sindicalismo peronista, los ortodoxos liderados por el metalúrgico Alejo Simó, continuaban dentro de la CGT pero mantenían su postura de limitar el acceso a los gremios no peronistas (*Córdoba*, 23-01-1971, p. 1).

Sin embargo, en las elecciones de 1971 triunfó la línea legalista y el secretariado fue dirigido por Atilio López y por Agustín Tosco. Aunque Tosco fue detenido y encarcelado por más de un año y medio, sin poder hacerse cargo en lo concreto de esta función, la CGT continuó en la misma sintonía política de combatividad y alianza del peronismo legalista y la izquierda. Apoyó conflictos de trabajadores de bases en el gremio del calzado, gastronómicos, petroleros, docentes municipales y del vidrio (enfrentándose en ocasiones a sus direcciones sindicales ortodoxas); aunque siguieron las discrepancias con los clasistas de Fiat hasta que éstos fueron disueltos en octubre de 1971.

La fórmula López-Tosco fue reelegida en abril de 1972, aún con Tosco preso en la cárcel de Rawson y sin la asistencia a la elección de los gremios ortodoxos. Continuaron durante esta época los paros activos, las alianzas con los partidos de izquierda y de centro izquierda para enfrentar la política represiva del Estado y pidiendo la libertad de los presos políticos. Al mismo tiempo, se acentuó el enfrentamiento abierto con el sector ortodoxo del peronismo local y con la CGT Nacional.

Es decir que, aunque no fueran parte de un colectivo identitario con los clasistas de Fiat, los nuevos dirigentes de la CGT local estaban siendo conmovidos por ese cambio de época post Cordobazo.

---

salariales y laborales que habían dado inicio al conflicto. Elpidio Torres fue criticado por las bases de SMATA por participar de las negociaciones del conflicto “saboteando” la lucha, contratando “rompehuelgas” durante el paro y por ser “cómplice” de las cesantías, brindando información sobre los activistas a la patronal (*LVI*, 09-07-1970, p. 17; *LVI*, 23-07-1970, p. 30; *LVI*, 24-10-1970, p. 19; *LVI*, 25/10/1970, p. 31; *LVI*, 15/11/1970, p. 30; *Córdoba*, 02-02-1971, p. 5; *Córdoba*, 08-02-1971, p. 7; *Córdoba*, 09-02-1971, p. 5).

<sup>6</sup> Atilio López tenía una considerable experiencia sindical, primero como delegado y luego como secretario general la UTA (Unión Tranviarios Automotor), el sindicato que representaba a los conductores de ómnibus. A López se lo conocía como el “Negro”, apodo que referenciaba, más que su color de piel, su origen popular y subalterno.

#### **4. La apertura democrática de 1973, la represión paraestatal y el clasismo en marrón**

En 1973 ganó en las elecciones de Córdoba la lista del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) que contaba con un amplio apoyo popular, excediendo incluso los márgenes del movimiento peronista y abarcando sectores progresistas e izquierdistas de distintos partidos políticos, movimientos sociales y sindicatos<sup>7</sup>. La presencia de Atilio López en la vicegobernación favoreció la apertura de canales institucionales para los reclamos sindicales, a la vez que cerró las vías de la represión estatal al movimiento obrero. Durante este período, por ejemplo, los actos y manifestaciones sindicales y políticos podían realizarse sin inconvenientes en el centro de la ciudad.

En mayo de ese año el gobierno levantó el Estado de Sitio vigente desde el 30 de junio de 1969, cesaron las zonas de emergencia -entre ellas la declarada en Córdoba-, se suspendió el funcionamiento de los Tribunales Militares y recobraron su libertad los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo.

El nuevo clima político favoreció a una relativa democratización en algunos sindicatos en los que agrupaciones clasistas y combativas llegaron a la dirección participando en sus elecciones, como en SMATA y Perkins; y en muchos otros casos pudieron participar en cuerpos de delegados, comisiones internas de reclamos (CIR) y agrupaciones. Dentro de la CGT local, la alianza del peronismo combativo y la izquierda marxista continuaba vigente, sostenida en el Movimiento Sindical Combativo (MSC) que lideraban Agustín Tosco, Atilio López y René Salamanca<sup>8</sup> (Flores Montenegro, 2008: 48; Gordillo, 2008: 74).

Durante este período las dirigencias clasistas en Fiat Concord y Materfer habían sido disueltas, pero su experiencia estaba presente en todo el mundo sindical, no sólo en el recuerdo de sus logros sino también en las dificultades que se les presentaron. La crítica y autocrítica de los protagonistas de esa experiencia había cargado culpas contra el ultraizquierdismo que la había caracterizado. Para algunos, esa estrategia había llevado al aislacionismo del resto de los movimientos sindicales y socio-políticos. Incluso algunos agregaban que esa postura los había hecho blanco de la represión (Nágera,

---

<sup>7</sup> Sobre los principales lineamientos y conflictos políticos durante el gobierno peronista en Córdoba, como también durante las tres intervenciones federales luego del “Navarrazo”, cfr. Servetto (2010).

<sup>8</sup> René Salamanca era secretario general del SMATA y militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR).

2010; Villa, 2011). Además, las críticas a la participación de los militantes de partidos de izquierda en el gremio generaron una discusión en torno al rol que debía cumplir el sindicato y el partido en la lucha revolucionaria.

Fue por ello que a partir de esta etapa el clasismo abandonó las tácticas “ultras” en pro de alianzas con el movimiento social y político radicalizado, no buscando consensos partidarios sino de sindicales con una línea clasista y combativa; de lo cual el MSC es una demostración. Esta táctica permitió al clasismo la conformación de listas gremiales para participar en elecciones sindicales, las que tuvieron como característica la agrupación de distintas tendencias dentro del campo izquierdista. Así se multiplicaron Movimientos de Recuperación Sindical y Listas Marrones<sup>9</sup>, en los que en general se pensaba al sindicato como un espacio de identidad colectiva diversa, diferenciando su rol respecto del partido que era comprendido como el sujeto político de la revolución al socialismo. No es casualidad que este tipo de estrategias se desplegó en un contexto político general de reapertura democrática del Estado, en el que cabía en el horizonte de oportunidades la posibilidad de disputar el poder a las tradicionales cúpulas políticas y sindicales.

Los amplios apoyos sociales hacia y desde el FREJULI provocaron la reacción de la derecha peronista, que desplegó una campaña de desprestigio contra ellos. La dirigencia ortodoxa se quejaba de la “infiltración marxista” y apuntaban al vicegobernador con denuncias como: “se está permitiendo que el marxismo cope los sindicatos desde la misma casa de gobierno” (*Córdoba*, 29-06-1973, p. 1).

Este enfrentamiento interno al peronismo se resolvió, más que con debates de ideas, con conflictividad sociopolítica violenta. Como las fuerzas policiales y militares se debían

---

<sup>9</sup> En SMATA el MRS formó la lista Marrón y ganó las elecciones en 1972 y 1974; en Perkins el MRS-Lista Marrón ganó las elecciones en 1973 y lideró el gremio hasta su intervención en 1976. En otros gremios se formaron agrupaciones con el mismo perfil que, aunque no llegaron a conformar comisiones directivas, tuvieron relevancia: en el Sindicato de la Construcción, en el Sindicato de Empleados Públicos (SEP). Durante este período también existieron expresiones clasistas, aunque sin estos mimbres, en agrupaciones que se formaron en el Sindicato del Caucho, Metalúrgicos, Viajantes, Petroleros, Gráficos y Lecheros. En los discursos de Tosco, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, se presentaba al Sindicalismo de Liberación como propuesta que, aunque se diferenciaba del clasismo en su nominación, compartía la posición de clase, la importancia de concientizar a los trabajadores e incluso, la lucha antiimperialista por el socialismo. Sus planteos, de clara orientación marxista, ha llevado a algunos autores como Brennan (1992), a sostener que el clasismo y el sindicalismo de liberación eran lo mismo. Para otros autores, en cambio, las diferencias entre uno y otro tenían que ver con los diferentes roles que asignaban al partido y al sindicato, en tanto los clasistas suponían que el sindicato reemplazaba al partido revolucionario (Santella y Andújar, 2007:58). En cambio la línea de Tosco concebía al sindicato como un espacio amplio, de convergencia y movilización de las bases; al mismo tiempo que lo diferenciaba de un partido de formación de cuadros que dirigiera el proceso revolucionario. Esta postura es más consecuente con la propuesta del clasismo de este período, y diferente de la del clasismo “ultra” del período anterior.

amoldar a la coyuntura constitucional, la violencia política circulaba en esferas extrainstitucionales. Así, represión política quedó en manos de las patotas dirigidas por la ortodoxia peronista enquistada en algunos sindicatos, en la estructura de “las 62” normalizadas, y también en algunos organismos del justicialismo como la Mesa Redonda Peronista Permanente. A la “tradicional” represión empresaria se sumó, en este período, la protección explícita a esas patotas que ejercían la represión paramilitar.

En Perkins denunciaban que desde el 25 de mayo de 1973, momento en que asumió el gobierno peronista, “paralelamente comienza la ofensiva de los sectores fascistas y de derecha, tendientes a frenar el alza del movimiento obrero”. Por eso se produjeron ataques y atentados contra sindicatos combativos y militantes obreros y de organizaciones políticas. En Perkins también recibieron amenazas, ataques y golpizas. Según su percepción: “todo esto forma parte de un mismo plan, orquestado por la burocracia sindical aliada de la derecha enquistada en el gobierno, tendiente a frenar el auge revolucionario del movimiento obrero y las masas populares”. (*SiTraP* Córdoba, 1974, p. 34).

El caso que más sobresalió de este tipo de ataques fue el que se organizó en contra del local de Luz y Fuerza, el SMATA y a la regional de la CGT en julio de 1973. En el primero, según declaró el mismo Agustín Tosco, participaron unos 100 hombres, “gente de Córdoba y Buenos Aires que responden al matonaje, al gangsterismo destinado a reprimir a las organizaciones que manifiesta su independencia de la burocracia y tienen una práctica democrática consecuente”. Tosco contextualizó el hecho con las declaraciones que había hecho el dirigente de la CGT nacional José Ignacio Rucci unos días antes, quien le dijo “se acabó la joda”; razón por la cual una asamblea del gremio lo declaró instigador de estos atentados (*Ya! Es tiempo de pueblo*, Buenos Aires, Año 1, N° 4, 20-07-1973, pp. 26-27). Montoneros incluso llegó a denunciar que los perpetradores de esos ataques eran “matones de Rucci, de Osinde y de López Rega que habían llegado desde hace una semana a Córdoba, introducidos al parecer en aviones especiales fletados por el Ministerio de Bienestar Social”. También dijeron que estas bandas actuaron de manera sincronizada, dirigidas desde la jefatura de Policía por el jefe de la fuerza, Domingo Navarro; y que esa vinculación explica por qué fueron detenidos 15 de los atacantes y rápidamente liberados (*El Descamisado*, Año I, N° 10, 24 de julio de 1973, pp. 38-39). Según su análisis, la “burocracia traidora” estaba “tirando, por elevación, al ejecutivo provincial”, lo que demostraba sus intentos de



intervención del gobierno de Córdoba (*El Peronista*, Año I, N° 2, Córdoba, 17 de julio de 1973, p. 6).

En el caso del ataque al local del SMATA, a diferencia del ataque a Luz y Fuerza donde fueron repelidos y se desbandaron, en el del SMATA ingresaron unas 15 personas que dijeron ser de un “comando peronista”. Redujeron a unos 10 obreros que estaban allí, los interrogaron al mejor estilo policial: “buscaban armas”. Cuando se enteraron por la radio que había fracasado el ataque a Luz y Fuerza decidieron evacuar, pero les faltaban autos así que se subieron a un taxi y se llevaron de rehenes a dos miembros de la CD. Al taxista le indicaron el local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) como destino, cerca del lugar liberaron a los raptados y luego se refugiaron en el sindicato, dejando asentadas todas las complicidades. Luego la UOM emitió un comunicado para aclarar que no tuvo ningún tipo de participación con los sucesos y que las versiones que intentaban incriminarlos eran “interesadas” (*Córdoba*, 17-07-1973, pp. 1 y 5; *El Descamisado*, Año I, N° 10, 24 de julio de 1973, pp. 38-39).

El tercero de estos hechos sucedió cuando un grupo de opositores a la conducción de la CGT regional, que se autodenominaban “Comando de la Resistencia Peronista” o “Auténticos Peronistas” –que pertenecían a la Juventud Sindical Peronista (JSP)-, ocuparon su local para luego entregárselo a la policía local que lo terminó clausurando. Atilio López, que había tomado licencia de la titularidad de la CGT para asumir su cargo de vicegobernador, intercedió para la devolución del local, lo que se logró al otro día. Para festejar la restitución se hizo un acto donde se reunieron alrededor de 1000 personas que coreaban: “Se va a acabar/la burocracia sindical”, “Vea, vea, vea/y póngase de pie/que Córdoba defiende su gloriosa CGT” (*Córdoba*, 13-07-1973, p. 9; *Córdoba*, 14-07-1973, p. 4; *Córdoba*, 15-07-1973, p. 3; *Córdoba*, 17-07-1973, pp. 1 y 5; *El Descamisado*, Año I, N° 10, 24 de julio de 1973, pp. 38-39).

De manera similar a esos ataques sucedieron otros, como asalto a las instalaciones de la Asociación Trabajadores de la Sanidad (ATSA) en Córdoba el 11 de septiembre de 1973.<sup>10</sup> El 4 de octubre del mismo año el Comando de Organización Peronista atacó

---

<sup>10</sup> En julio de ese año los trabajadores de la Sanidad habían destituido a la CD del gremio en una asamblea general por malversación de fondos, complicidad con las patronales, etc. Como consecuencia, Otto Calace mandó como interventor del gremio a un “compinche”, Edgardo Sierra. Las bases, dirigidas por el PB y la JTP, decidieron ocupar el local, en un enfrentamiento con la burocracia, que culminó en el tiroteo de la madrugada del 11 de septiembre (*El Peronista*, Año I, N° 8, Córdoba, 4° semana de septiembre de 1973, p. 2-3; *Córdoba*, 11-09-1973 p. 1-2). Entre los presos estaba el propio Sierra y Clavero, quien se había desempeñado en la Secretaría de Gobierno de la Comuna de Santa Fe, había sido

locales de sindicatos combativos y especialmente a los sindicalistas René Salamanca y Agustín Tosco. El mismo día se ametralló una asamblea de trabajadores de la construcción opositores a la conducción gremial que estaban reunidos en el local de la CGT regional. En noviembre estalló un artefacto explosivo frente al local del Sindicato de Luz y Fuerza y se colocó una bomba en el local del SMATA que no llegó a estallar (*Córdoba*, 13-11-1973, p. 4).

Aunque algunos sectores interpretaban que estos ataques eran parte de una “purga” que la derecha venía realizando dentro de las filas del peronismo, lo cierto es que ni Luz y Fuerza ni el SMATA estaban dirigidos en esos años por peronistas revolucionarios, ni tampoco se identificaban con ese signo los miembros del MRS de la Construcción, al tiempo que la CGT, como explicamos recién, compartía su dirección entre peronistas legalistas y marxistas. Más bien se trataba de dirigentes y activistas que se identificaban con la izquierda y, en algunos casos, con el marxismo. Así lo denunciaba incluso el Peronismo de Base, que apuntaban contra “los matones de la derecha y de los burócratas sindicales y políticos” que preparan “una ola de terror que tiene como objetivo aterrorizar con el asalto y ataque a todos los sindicatos combativos y contra activistas sindicales y políticos consecuentes” (*Córdoba*, 07-12-1973, p. 4).

Esta represión se fue recrudeciendo a lo largo de estos meses, y a fines de 1973 sucedió el primer asesinato de un activista del SMATA y militante del PC, llamado Arnaldo Rojas. Su cadáver, que presentaba huellas de violencia externa, apareció flotando en un canal de Chacras de la Merced y el médico forense informó que se deceso había sido por asfixia por inmersión. La prensa suponía que se trataba de un “crimen con implicancias políticas y gremiales”, en tanto el PC responsabilizó “a la derecha y a la burocracia sindical”. El SMATA llamó a un inmediato abandono de tareas repudiando la muerte y se refirió a la existencia de bandas armadas que amenazaban continuamente contra la vida de directivos, delegados y activistas de los sindicatos combativos; lo que fue ratificado cuando, a menos de 48 horas del hecho, estalló una bomba en el coche que usaba Salamanca aunque sin producir más que destrozos materiales (*Córdoba*, 08-12-1973, p. 5; *Córdoba*, 09-12-1973, p. 4; *Córdoba*, 10-12-1973, p. 4; *SMATA*, N° 116, *Córdoba*, 13-12-1973, p. 3).

---

guardaespalda de Rucci, de José Otero y luego del vicegobernador de Santa Fe, Eduardo Cuello. Además, durante el mes de junio había participado de una agresión similar contra ATSA de Rosario, del que luego fue excarcelado (*Ya! Es tiempo de pueblo*, Buenos Aires, Año 1, n°17, 19-10-1973, pp. 22-24; *El Peronista*, Año I, N° 3, *Córdoba*, 24-07-1973, p. 12; *Córdoba*, 15-09-1973, p. 3).

Ante estas denuncias la UOM seccional Córdoba se sintió aludida. Es que apuntar a la burocracia sindical, la derecha y bandas armadas era, como quedó demostrado, insinuar que el sindicato metalúrgico tenía algo que ver. Así que la UOM se vio casi obligada a publicar una solicitada titulada “Ante una nueva infamia” en la que se consideraban “ridículo” que se haya culpado a “bandas armadas y matones a sueldo” de la muerte de Rojas, ya que la autopsia “demostró que murió ahogado” (*Córdoba*, 11-12-1973, p. 7). Lo ridículo es decir, en este contexto, que Rojas apareció flotando en un canal porque no sabía nadar.

Este caso, que nunca fue aclarado por la Justicia, no fue el único sino que se fue multiplicando en otros secuestros de estudiantes y profesionales. A partir de estos datos podemos considerar que quienes venían desarrollando esa ofensiva fascista contra militantes y organizaciones de izquierda –dentro y fuera del movimiento justicialista<sup>11</sup>- pertenecían a la ortodoxia peronista. Al parecer, una diversidad de comandos que se habían formado en el período anterior y que tenían una existencia relativamente difusa, fueron reuniéndose y coordinándose, formando el Comando de Resistencia Peronista y luego el Comando de Organización Peronista.

A pesar de la postura del gobierno provincial a favor de los trabajadores de bases y los sindicatos combativos, la vinculación de estos comandos con otras esferas del poder era evidente, tanto en la estructura sindical, principalmente con la UOM, como en las esferas gubernamentales como el ministerio de Bienestar. Así lo declaraba el PB, que exigía al gobierno provincial que “expulse a todos los matones de Bienestar Social que están en Córdoba y estreche filas con el pueblo para responder a la agresión” (*Córdoba*, 07-12-1973, p. 4). Y es que en ese ministerio que a nivel nacional estaba encabezado por López Rega, organizador de la Triple A, a nivel provincial su composición no era muy diferente.

Lo cierto es que para la efectividad de esta represión paraestatal, era necesaria su conjunción con las estrategias empresarias que, aunque no abandonaron sus

---

<sup>11</sup> Dentro de la interna peronista, los ataques violentos también estaban a la orden del día durante 1973. El 27 de septiembre dispararon desde dos autos contra la sede del PJ Córdoba, el 1º de octubre hirieron de bala a Ramón Fajardo, militante de la JP Córdoba; y el mismo día amenazaron de muerte a los ocupantes del local del PJ Córdoba y a 5 legisladores del FREJULI Córdoba. El 4 de octubre el Comando de Organización atacó locales de sindicatos combativos, amenazó al gobernador, vicegobernador, presidente del senado, y al dirigente de la JP Mozzé, hoy desaparecido. El 8 de octubre se ametralló nuevamente el frente del local del PJ Córdoba (*Ya! Es tiempo de pueblo*, Buenos Aires, Año 1, N° 17, 19-10-1973, pp. 22-24)

tradicionales estrategias de dominación de la clase obrera, en este período cambiaron su funcionamiento. Así lo denunciaban algunos trabajadores de bases, que se quejaban que algunas empresas importantes de la industria cordobesa, como Fiat y Káiser, habían empezado a “amotinar canas, agentes de la UOM, milicos serviles disfrazados de obreros (...) que se pasean por las plantas armados”. Por ejemplo “en los jardines de Concord muchas veces se pasean hombres portando ametralladoras. Se cree que vienen de Buenos Aires porque nadie los conoce”. Su objetivo era espantar posibles organizaciones clasistas, e incluso, los reclamos más básicos: “Nosotros muchas veces llamamos a asamblea y entonces viene el encargado de las secciones, se para en la puerta y con una libreta y dice ¡el que se mueve va a ser pasible de una sanción disciplinaria! Después la empresa saca comunicados amenazantes” (Conferencia de prensa de despedidos de Fiat Concord y Materfer en el local de la Unión Obrera Gráfica en Buenos Aires, declaraciones de Mario Abdon publicadas en *Ya! Es tiempo de pueblo*, Año 1, N° 9, Buenos Aires, 24-08-1973, pp. 14-15).

Esa situación era útil a que esos agentes pudieran dedicarse a recabar información sobre el activismo y la militancia fabril desde adentro. Algo similar sucedió en Perkins:

Empezaron a infiltrar policías, este eh, bueno, que iban, trabajaban como operarios pero eran policías espías. Eso nosotros lo comprobamos. Incluso con Villa una vez vimos que uno eh entró con un arma, bah, cuando guardaba el arma en el cofre. Y fuimos y lo acusamos al... lo llevamos al jefe de personal hasta el cofre y todo. Este y le sacaron el arma (...) ellos estaban eh digamos, eran compinches de los, del directorio de la empresa, bah, o los contrataban (Rubén Ortiz, 2011).

Aún en este contexto de acentuación represiva extrainstitucional, la estrategia obrera clasista siguió siendo el cambio revolucionario hacia el socialismo. Pero en lo táctico, y como parte de la crítica que los trabajadores hicieron sobre la experiencia del SiTraC-SiTraM, se prefirió controlar la producción antes que proponer “huelgas salvajes”, que ya se sabía, desataba la feroz represión de patrones, patotas y la justicia. Además, el control de la producción se producía en un marco de legalidad, propio de los aires democráticos que se respiraban.

Pero para enfrentar a las bandas armadas que los atacaban, algunos grupos –militantes o no de organizaciones político-militares- comenzaron a implementar mecanismos de autodefensa, que suponía desde valerse de estrategias de huída en momentos de persecución hasta la portación y manejo de armas (“Bolita”, 2011; Nágera, 2010).

## 5. El “Navarrazo”, la coordinación represiva y la clandestinización, 1974-1976

A partir del 28 de febrero de 1974 Córdoba comenzó a vivir un “clima de guerra”. Ese día el entonces Jefe de Policía, Tte. Cnel. Antonio Domingo Navarro, destituyó al gobierno provincial elegido democráticamente 10 meses antes.

Tanto el “Navarrazo” como la posterior intervención federal de la provincia de Córdoba aceptaron la coordinación desde el espacio gubernamental de la represión política de estilo paramilitar que venía practicando el peronismo ortodoxo. A partir de allí se restituyó la hegemonía política y sindical en manos de sectores identificados ideológicamente con la derecha, se profundizó la fractura institucional, se amplió la circulación de la violencia política y se agravó la aplicación de la represión a los militantes del campo izquierdista y popular (Ortiz, 2013).

Entre los que se pronunciaron en contra de la intervención se sumaron casi todas las fuerzas del espectro izquierdista de Córdoba.<sup>12</sup> Y es que era una obvedad que el golpe no sólo atacaba al gobierno provincial sino sobre todo a los trabajadores combativos y a los militantes izquierdistas. Así lo declaró el MSC, que denunciaba al golpe como parte de una ofensiva de los sectores “fascistas” contra ellos y “los peronistas combativos, los radicales progresistas, cristianos revolucionarios, intransigentes, socialistas, comunistas o de cualquier otra ideología o posición antifascista” (*LVI*, 01-03-1974, p. 11; *LVI*, 02-03-1974, p. 9; *LVI*, 12-03-1974, p. 14; *LVI*, 15-03-1974, p. 16). Incluso el dirigente Agustín Tosco declaró que este golpe “policíaco burocrático fascista” no era un caso aislado y de oposición al proceso nacional, sino que era parte de una ofensiva coordinada que incluía el congreso normalizador de la CGT en Alta Gracia (Archivo de audio de Agustín Tosco, “Los diez puntos del MSC”, 28-05-1974).

---

<sup>12</sup> Entre ellos el Encuentro Nacional de los Argentinos, el Frente de Izquierda Popular, el Partido Socialista de los Trabajadores, Palabra Obrera, Vanguardia Comunista, Partido Comunista Revolucionario, Cristianismo Revolucionario, Peronismo de Base, Peronismo Descamisado, Montoneros, Frente Antiimperialista y por el Socialismo, el Movimiento de Integración y Desarrollo, la Unión Cívica Radical, la Juventud Radical, y otras organizaciones sociales como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, centros de estudiantes universitarios y asociaciones profesionales de médicos y abogados. Aunque la UCR y la Juventud Radical no eran, precisamente, una fuerza de izquierda; si alzaron sus voces en contra del Navarrazo y pugnaron por la restitución del gobierno a las autoridades elegidas democráticamente (*LVI*, 01-03-1974, p. 12; *LVI*, 02-03-1974, p. 6; *LVI*, 01-03-1974, p. 9 y 12; *LVI*, 04-03-1974, p. 6; *LVI*, 05-03-1974 p. 8; *LVI*, 07-03-1974, p. 9).

Y es que el mismo día del “Navarrazo” se realizó un Congreso Normalizador en la CGT cordobesa que permitió que todos los cargos quedaran en manos del sector ortodoxo de las 62 Organizaciones.<sup>13</sup> Presidió el plenario el secretario adjunto de la CGT nacional Raúl Ravitti y el ministro de Trabajo Ricardo Otero, quien declaró al finalizar que “hoy le diré al general Perón que la CGT de Córdoba está en manos de auténticos peronistas” (*LVI*, 01-03-1974, p. 11). La connivencia entre este nuevo secretariado de la CGT y el gobierno nacional quedó clara cuando, entre sus primeras declaraciones, los sindicalistas pidieron la intervención federal a Córdoba para acabar con el “foco infeccioso” y alcanzar la “comunidad organizada” (*Córdoba*, 03-03-1974, p. 5).

Para evitar que el movimiento obrero se movilizara en contra de ese congreso normalizador, el sector ortodoxo había decretado un paro por tiempo indeterminado, que iniciaron a las cero horas del mismo 28 de febrero. También fueron detenidos en sus domicilios la mayoría de las comisiones directivas, delegados y activistas de reconocida trayectoria en las filas del peronismo progresista durante esa misma madrugada. Pero no sólo se detuvo a los peronistas: “Los sediciosos, vestidos de civil, realizaron operativos de búsqueda de militantes de las distintas tendencias de izquierda” (*LVI*, 01-03-1974, p. 11, 12).

En esta situación, a las 14 horas del mismo 28 de febrero, a pocas horas del “Navarrazo” y mientras sucedía el congreso de la CGT en la vecina ciudad de Alta Gracia, unos 40 sindicatos que formaban parte de la anterior CGT (formada por los peronistas legalistas, independientes y no alineados), llamaron a desconocer a la CGT “normalizada” y decretaron un paro por 36 horas, que después se extendió hasta las 48 horas (*LVI*, 01-03-1974, p. 11; *LVI*, 02-03-1974, p. 9; Archivo de audio de Agustín Tosco, “Los diez puntos del MSC”, 28-05-1974). Pero a diferencia de lo que habían hecho los ortodoxos, este paro se declaró con la modalidad de “resistencia activa” ya que era para movilizar a los trabajadores desde sus lugares de trabajo (al iniciarse a las 14 horas implicaba que la gente había concurrido a su puesto si era del primer turno o estaría concurriendo si era

---

<sup>13</sup> Unas semanas antes del congreso de la CGT se habían unificado las dos fracciones de las 62 Organizaciones, la legalista y la ortodoxa. Entre estas dos fracciones decidieron que el próximo secretariado de la CGT estaría integrado únicamente con peronistas, 4 serían representantes de la fracción “legalista” y 4 de la “ortodoxa” (*Córdoba*, 27-01-1974, p. 3; *LVI*, 02-02-1974, p. 13; *LVI*, 10-02-1974, p. 21). La vuelta de Perón a la presidencia les había dado fuerzas para prescindir de los no peronistas. De hecho, sindicatos “independientes” como Luz y Fuerza, Empleados Públicos, Prensa y Perkins no pudieron participar del congreso (*LVI*, 23-02-1974, p. 13). Pero a último momento, también dejaron afuera a los “legalistas”, ya que los 4 dirigentes de ese grupo que habían sido preseleccionados para conformar el secretariado luego del acuerdo en las “62”, fueron detenidos ese mismo día sin poder ocupar sus cargos (*Córdoba*, 28-02-1974, p. 1 y 4).

del segundo; y desde allí podían movilizarse). Esto demuestra que si bien el “anticordobazo” fue planificado por la derecha, el sector combativo inició una resistencia callejera que continuó en enfrentamientos con la policía durante actos organizados por estudiantes y organizaciones de izquierda (*LVI*, 14-03-1974, p. 18; *LVI*, 16-03-1974, p. 9; *LVI*, 28-03-1974, p. 11).

Sin embargo, la resistencia al “Navarrazo” no obtuvo los resultados esperados, ya que no se restituyeron las autoridades democráticamente electas y la CGT “normalizada” continuó en pie. Como si eso fuera poco, la represión al movimiento socio-político izquierdista volvió a tener institucionalidad.

Es que desde el “Navarrazo” la policía inició una “cruzada de reafirmación patriótica” (*LVI*, 08-03-1974, p. 14).<sup>14</sup> Para ello el mismo Navarro junto al comisario inspector Choux, el comisario Telleldín, el agente Buceta y un civil llamado San Millán Molina; planificaron y pusieron en funciones a grupos –formados por policías y civiles- cuya tarea era acabar con la “delincuencia organizada” (*LVI*, 01-03-1974, p. 1).

Con esa definición de fronteras ideológicas se dio vía libre al ataque a militantes y activistas de izquierda que participaban de actos, que repartían volantes, o que portaban una bandera; allanando locales partidarios y sindicales e incluso domicilios sin órdenes judiciales, deteniendo e incurriendo en torturas y malos tratos.

Durante marzo hubo nuevos ataques a los locales de Luz y Fuerza, SMATA y ATSA. En mayo de ese año estallaron bombas en el local del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y en otros lugares. En junio atacaron en un mismo día el local del SEP y el de la UTA, y en el segundo los atacantes eran una “columna que vociferaba consignas macartistas y fascistas [*que*] atacó a balazos y con bombas molotov el edificio (...) y agredió a periodistas allí presentes”. El mismo grupo también planificó incendiar el local de SMATA y Luz y Fuerza, llegando hasta proximidades de los mismos pero, como la policía los repelió, se concentraron en el Paseo Sobremonte y entonaron “Queremos a Navarro, queremos a Navarro”, “Ya van a ver, ya van a ver, cuando vengamos la muerte de José [*Rucci*]”, y “Se siente, se siente, Rucci está presente” (*Córdoba*, 14-06-1974, pp. 4-5).

---

<sup>14</sup> *LVI*, 08-03-1974, p. 14. Además de la policía local, se sumaron a su “cruzada de reafirmación patriótica” batallones completos de Policía Federal y Gendarmería que llegaron desde Buenos Aires munidos de “equipos de represión antiguerrillera” (*LVI*, 04-03-1974, p. 9; *LVI*, 06-03-1974, p. 12).

En octubre nuevamente se realizaron ataques coordinados al local del PC, del PST, del SMATA y de Luz y Fuerza, donde supuestamente se hallaron armas, razón que alcanzó para ordenar la intervención y sirvió para justificar nuevas detenciones a activistas (*Córdoba*, 10-10-1974, p. 9; *Córdoba*, 11-10-1974, pp. 4,5; *Córdoba*, 08-11-1974, p. 4; *Córdoba*, 12-12-1974, p. 4; *Córdoba*, 06-08-1975, p. 4).<sup>15</sup>

Es decir que esa represión paraestatal que atacaba sindicatos clasistas, y que venía siendo diferente de la institución policial, comenzó a articularse con las esferas institucionales, tanto del gobierno como de los sindicatos a partir de la preocupación conjunta por “combatir la subversión” que justificó la declaración nacional del Estado de Sitio en noviembre de 1974 (*Córdoba*, 08-11-1974, p. 11).

Al parecer también tenían sus propias estructuras orgánicas, como la Acción Revolucionaria Anticomunista (ARA), que existía desde marzo de 1971 pero fundó su filial en Córdoba en abril de 1974. En su presentación, registrada en periódicos masivos, mostraban el saludo propio de su organización, con un choque de puños. Allí también se presentaron sus principales referentes regionales, quienes opinaban que Julio Antún era un “verdadero dirigente” y auténtico peronista. Además presentaron su periódico, que paradójicamente se titulaba “Tribuna Democrática” y que fue desde donde apoyaron la destitución de Obregón Cano y López por ser “marxistas” (*Córdoba*, 09-04-1974, p. 8).

Unos meses después ya podía hacerse pública la cena de camaradería de la Alianza Libertadora Nacionalista, que había sido apuntada por Montoneros como una de las organizaciones que había impulsado el “Navarrazo”. Los diarios noticiaban la asistencia a esa cena de unos 500 dirigentes políticos, sindicales, juveniles y femeninos; entre ellos el interventor federal Lacabanne y el dirigente de la MRPP Julio Antún. En la nota se comentaba que la decoración del estrado consistía en una bandera con el escudo justicialista y el “cóndor aliancista”, además de dibujos de San Martín, Rosas, Perón, Evita e Isabelita (*Córdoba*, 21-01-1975, p. 5).

Los hechos represivos contra los activistas sindicales fueron en aumento desde septiembre de 1974: detenciones, disparos en domicilios y locales, golpizas, secuestros

---

<sup>15</sup> En 1975 Tosco denunciaba que en el operativo del 9 de octubre del año anterior la Policía introdujo armas en el local sindical y que, luego de 48 horas en que el local estaba ocupado por la Policía buscando armas, hallaron dos granadas en su escritorio (*Córdoba*, 30-04-1975, p. 7). En esos allanamientos fueron detenidos 29 ex dirigentes de SMATA y Luz y Fuerza, quienes fueron sobreseídos por la Justicia Federal en agosto de 1975 pero no fueron efectivamente liberados porque quedaban a disposición del PEN (*Córdoba*, 15-08-1975, p. 7).



y las primeras desapariciones. Algunos de los secuestrados aparecían a los pocos días, incluso a pocas horas de su secuestro, a otros se los podía detener por largos años en la cárcel. Las modalidades de detenciones en esa época implicaban golpizas, torturas e interrogatorios, incluso en los casos de detenciones “blanqueadas”.<sup>16</sup> También existieron casos en que detenidos por razones políticas en cárceles de Córdoba fueron ejecutados un tiempo después del golpe de Estado 1976.

En este contexto, los clasistas -que después del congreso de la CGT en Alta Gracia se habían agrupado en la Mesa Coordinadora de Gremios en Lucha- vieron recortadas sus posibilidades de expresión. Si bien fueron quienes mantuvieron alguna actividad sindical y política en los gremios, la mayoría de sus movilizaciones tenían por objetivo reclamar la libertad de sus compañeros detenidos, u organizar colectas para sus familiares; y a partir de 1975 cada vez fueron más los abandonos ante el secuestro de delegados y obreros. Las reivindicaciones laborales y/o salariales se reclamaron mucho más con abandonos de tareas, paros de una o dos horas, huelgas de brazos caídos y “trabajo a tristeza” antes que con paros activos y grandes movilizaciones. A partir de la lectura de los diarios de la época se hace evidente el paso de la ofensiva a la defensiva, que cambió la tendencia iniciada en 1969.

Por ello, por razones de seguridad, tuvieron que desplegar diferentes tácticas de protección, sea la clandestinidad, el exilio y, en mayor medida, el insilio.

Sin desconocer que muchas veces los activistas obreros militantes orgánicos recibieron de sus estructuras partidarias la ayuda necesaria para entrar en la clandestinidad y/o exiliarse, en muchos casos de militantes periféricos, simpatizantes o de activistas independientes, fueron sus redes de sociabilidad informales las que sostenían la resistencia; y lo seguirán siendo después de 1976.

Así sucedió con otros activistas perseguidos, que decidieron la estrategia del insilio, es decir, mudarse de ciudad dentro de nuestro país, a veces con su identidad cambiada. En ocasiones se mudaban a Buenos Aires, ya que al tener enormes dimensiones y densidad poblacional, permitía el establecimiento sin necesidad de dar cuenta de filiaciones familiares y/o políticas. Otras veces, la opción por pequeñas ciudades o poblados del interior de Córdoba o de otras provincias, les permitía acoplarse a nuevas redes de

---

<sup>16</sup> En la jerga de aquellos tiempos “blanqueado” significaba estar reconocido legalmente como un detenido, ser alojado en una cárcel y no en un centro clandestino de detención. Podía implicar ser un procesado judicial o estar a disposición del PEN, sin causa legal.

sociabilidad a partir de integrantes de la familia o allegados. En cualquiera de las iniciativas, recibieron la ayuda de sus familiares y vecinos, que les prestaron donde vivir; o de sus antiguos compañeros de la fábrica, que hacían colectas para ayudarlos económicamente ante la falta del sueldo de la fábrica.

Aunque el exilio era una posibilidad a la que algunos se sumaron, es llamativa la proporción mayor de gente que buscó no alejarse tanto de su mundo conocido. Ello se debió a que, por un lado, no podían concebir su vida separados de las redes de sociabilidad informales que mencionamos y, por otro lado -pero en estrecha vinculación con eso- por el extraordinario arraigo de los/as obreros/as a la propia cultura, a su lenguaje, a sus tradiciones.

### **Comentarios finales**

Reflexionar sobre la estrategia obrera requiere necesariamente moverse sobre la lógica histórica. Para ello no sólo es necesario analizar los discursos, ideas y acciones de la clase obrera, sino también analizar sus relaciones conflictivas hacia adentro de la clase y con las clases dominantes. Es en esa trama que se tejía una estrategia, ensamblada en un horizonte de posibilidades y de limitaciones que la determinaban.

Como hemos analizado a lo largo de este trabajo, entre 1969 y 1971 el ciclo de politización y radicalización favoreció la existencia de expresiones ultraizquierdistas en el mundo fabril. A su vez, la profundización de la represión estatal (policial, militar y judicial) del gobierno de facto, en consonancia con la tradicional represión empresarial, originó una estrategia de lucha obrera de bases, “por fuera y al margen” de las instituciones. No es casualidad que en estos tiempos el repertorio de protestas se marcó a fuego con las “huelgas salvajes” que desconocían la legalidad burguesa.

En la segunda etapa que analizamos, durante la apertura democrática de 1973, las instituciones que se venían dedicando a aplicar la represión se adaptaron a la coyuntura constitucional. De esta manera, la violencia política circuló extrainstitucionalmente, aunque anclada en instituciones sindicales, gubernamentales y partidarias que respondían a los “comandos” que agrupaban al peronismo ortodoxo fascistoide y antiizquierdista. Muchos empresarios buscaron acuerdos con estos grupos, como parte de una estrategia para enfrentar al clasismo obrero que durante este período seguía insistiendo en la búsqueda de un cambio revolucionario al socialismo.

A diferencia del período anterior, y como parte del aprendizaje que la experiencia clasista estaba generando, los dirigentes sindicales izquierdistas durante este período planificaron la lucha obrera por dentro de las instituciones sindicales. Se organizaron listas multipartidarias –dentro del campo de la izquierda y en algunos casos en alianza con el peronismo progresista- y se diferenciaba la lucha sindical de la partidaria, la primera definida como espacio social de convergencia de posturas políticas diversas. Como parte de este momento, los reclamos laborales eran exigidos con el control de la producción como táctica que por antonomasia se adaptaba a la legalidad. Aún así, y para hacer frente a las patotas armadas que los atacaban, algunos obreros comenzaron a implementar mecanismos de autodefensa, principalmente como parte de la política de alguna organización partidaria, sea político-militar o no armada.

Entre 1974 y 1976 el terrorismo de Estado comenzó a ser una práctica social y política utilizada desde las esferas gubernamentales para reprimir a los sectores obreros clasistas y combativos. Aunque la vida política del clasismo seguía latiendo, las limitaciones impuestas desde las clases dominantes fueron cada vez más concretas y remiten a los hechos represivos. En este contexto de pase de la ofensiva a la defensiva en la movilización popular e izquierdista, la estrategia obrera -aunque discursivamente nunca abandonó el ideal de socialismo-, en la práctica tuvo que abocarse a la supervivencia humana.

### **Bibliografía citada**

- BASUALDO, Victoria (coord.) (2011) *La clase trabajadora argentina en el siglo XX: experiencias de lucha y organización*. Buenos Aires: Atuel.
- BASUALDO, Victoria (2008) “Los delegados y las comisiones internas en la historia argentina. Una mirada de largo plazo, desde sus orígenes hasta la actualidad”. En: *Desarrollo económico, clase trabajadora y luchas sociales en la Argentina Contemporánea*. Buenos Aires: IEC-CONADU, pp. 256-316.
- CAMARERO, Hernán (2007) *A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina, 1920-1935*. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI.
- DUVAL, Natalia (2001) *Los sindicatos clasistas: SITraC (1970-1971)*. Córdoba: Fundación Pedro Milesi.
- FLORES, Gregorio (2004) *SITRAC-SITRAM. La lucha del clasismo contra la burocracia sindical*. Córdoba: Editorial Espartaco Córdoba.
- FLORES MONTENEGRO, Rafael (2008) *Pasión y caída. Memoria de la Mesa de Gremios en Lucha. Argentina, 1973-1976*. Unquillo: Ed. Abrazos.
- GORDILLO, Mónica (ed.) (2001) *Actores, prácticas, discursos en la Córdoba combativa. Una aproximación a la cultura política de los '70*. Córdoba: Ferreyra Editor.

- GORDILLO, Mónica (2003) “Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada, 1955-1973”; en: Daniel James (dir.) *Nueva Historia Argentina: violencia, proscripción y autoritarismo, 1955-1976*. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, pp. 329-380.
- GORDILLO, Mónica B (2008[2007]) “Sindicalismo y radicalización en los setenta: las experiencias clasistas”. En: Clara E. Lida, Horacio Crespo, Pablo Yankelevich (comps). *Argentina 1976: estudios en torno al golpe de Estado*. Buenos Aires: FCE, pp. 59-84.
- IÑIGO CARRERA, Nicolás (2000) *La estrategia de la clase obrera, 1936*. Buenos Aires: Pimsa, La Rosa Blindada.
- ORTIZ, Esteban Rafael (2007) *Los abogados del pueblo: el derecho contra el poder. El caso del Dr. Alfredo Alberto “Cuqui” Curutchet (1969-1974)*. Córdoba: Narvaja Editor.
- ORTIZ, Laura (2012) “Memorias que hacen historia. La cultura obrera y sus tradiciones en la Provincia de Córdoba durante la década del setenta” En: *Aletheia*. Revista de la Maestría de Historia y Memoria de la FaHCE, vol 2, N° 4, julio 2012, Universidad Nacional de la Plata.
- ORTIZ, Laura (2013) “Recuerdos y olvidos sobre el terrorismo de Estado. Córdoba, Argentina, 1974-1976”. En: *Desde las profundidades de la historia oral: Argentina, Brasil y Uruguay*. Robson Laverdi y Mariana Mastrángelo (comps.), Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Imago Mundi; RELAHO, pp. 81-108.
- POZZI, Pablo. “Memoria, politización y fuentes orales en la cultura de los obreros argentinos”. En: *Historia, voces, memoria. Revista del Programa de Historia Oral. INIBI-UBA*, 2/2010, Buenos Aires. Pp. 41-57.
- POZZI, Pablo y SCHNEIDER, Alejandro (2000) *Los “setentistas”. Izquierda y clase obrera. (1969-1976)*. Buenos Aires: EUDEBA.
- SANTELLA, Agustín y ANDÚJAR, Andrea (2007) *El Perón de la fábrica éramos nosotros. Las luchas metalúrgicas de Villa Constitución, 1970-1976*. Buenos Aires: Desde el subte.
- SERVETTO, Alicia (2010) “Tensiones y contradicciones del tercer gobierno peronista en Córdoba, 1973-1976”. En: César Tcach (coord.), *Córdoba Bicentenario: claves de su historia contemporánea*, Córdoba: Centro de Estudios Avanzados y Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, pp. 389-416.
- WILLIAMS, Raymond (2000[1977]) *Marxismo y literatura*. Ediciones Península, Barcelona.

### Entrevistas citadas

- “Bolita”. Delegado de Tubos Transelectric, miembro de la Mesa de Gremios en Lucha. Militante de Poder Obrero y FAS. Entrevista realizada en Pilar, Córdoba el 26/10/2011 por Laura Ortiz y Ma. Paula Puttini.
- NÁGERA, Roberto. Delegado de Transax. Miembro de la Comisión Directiva y delegado paritario. Integrante del Movimiento de Recuperación Sindical - Lista Marrón del SMATA. Militante de Vanguardia Comunista. Entrevista realizada en Córdoba el 16/07/2010 por Laura Ortiz.
- ORTIZ, Rubén A. Delegado de Inspección en Perkins. Entrevista realizada en Córdoba el 16/09/2011 por Laura Ortiz.
- PASSETTI, Antonio; operario de Renault, entrevista realizada en Córdoba el 18-08-2010 por Laura Ortiz.
- VILLA, Juan Enrique (a) “Víbora”. Delegado y miembro de Comisión Directiva de Perkins, integrante de la Lista Marrón de Perkins. Militante de Movimiento de Liberación Nacional (MLN, “Malena”), luego en El Obrero y más tarde en Poder Obrero. Entrevista realizada en Córdoba el 29/08/2011 por Laura Ortiz.